



FUNDACION FELIPE HERRERA LANE

INFORME DE TENDENCIAS

ABRIL 2023

Lo que se juega en la elección del 7 de mayo

La campaña electoral para elegir el consejo constituyente no ha logrado prender en la ciudadanía, que no logra identificar los candidatos y lo que verdaderamente representan. Y todo apunta a una menor participación que en el plebiscito anterior. Marginalmente ello pudiera favorecer al oficialismo, pero todo apunta a que la oposición se impondrá ampliamente, con la posibilidad de conquistar la mayoría absoluta en el próximo consejo constituyente.

En un escenario dominado por la crisis de seguridad ciudadana y una crisis migratoria que se mantiene, la opinión pública tiende a volcarse hacia opciones más conservadoras, demandando mano dura en contra de la delincuencia y la expulsión de los inmigrantes indocumentados, tal como lo muestra una reciente encuesta de la UDP y Feedback. Y aunque es una crisis que viene de lejos, la ciudadanía tiende a responsabilizar al gobierno de turno por esta crisis, que se constituye en la principal preocupación de la ciudadanía.

A ello se suma el descrédito de la política y la pérdida de confianza en las instituciones. La encuesta de la UDP y Feedback muestra, por primera vez, que quienes no valoran la democracia supera a quienes lo hacen. Tan sólo un 8 % de los encuestados se muestra disponible a votar por candidatos que representen a partidos políticos, en tanto que cerca de un 25 % votaría “por gente como uno”.

La gran interrogante es como estas percepciones se traducen en el terreno electoral. En su esfuerzo por mantener su hegemonía en la derecha, Chile Vamos ha endurecido su postura en materia de seguridad ciudadana. La interpelación a la ministra Carolina Tohá, presentada por parlamentarios de RN y aprobada en la cámara de diputados, apunta en esa dirección. Claramente el temor de Chile Vamos es ser superado por sus exaliados republicanos, que aparecen disputando el voto de derecha en los enclaves históricos de la derecha. Entre ellos el emblemático distrito # 11 de la capital y la región de la Araucanía.

Por su parte, Franco Parisi cumplió su promesa de retornar al país en la fase final de la campaña para apoyar a los candidatos del partido de la gente, que constituye una de las

incógnitas de la próxima elección. Con un discurso agresivo y confrontacional, Parisi se ha preocupado de consolidar sus aproximaciones con el alcalde de la Florida y la diputada Pamela Jiles, que ha aparecido en la franja de su partido.

La duda es si las diversas derechas- republicanos, Chile Vamos y el partido de la gente- cualquiera sea la correlación de fuerzas en su interior, tienen las condiciones para actuar unidos no tan sólo frente al proceso constituyente en curso sino frente a los demás temas de la agenda, o es posible establecer diálogos diferenciados y búsqueda de acuerdos con los sectores mas racionales y sensatos de la oposición. Es todo un test, especialmente para Chile Vamos, que se proclama de centro derecha y busca afianzar su alianza con el variopinto centro político, aún en redefinición.

En el oficialismo, es más que evidente que la alianza que integra Apruebo Dignidad y el partido socialista se constituyen en la fuerza mayoritaria, en relación con la lista alternativa que conforma el PPD, PRSD y la DC. Y no es un dato menor lo que suceda con los candidatos socialistas, luego que ese partido optara por integrarse al bloque de izquierda, desmarcándose de sus aliados del socialismo democrático. Bien pudiera ser que los socialistas aportaran un importante caudal de votación y no tuvieran buenos resultados en cuanto a la elección de sus candidatos, lo que repondría el debate respecto de su política de alianzas.

Y algo similar ocurre con la lista alternativa, que ha buscado diferenciarse de Apruebo Dignidad, buscando recuperar el voto moderado o de centro, desencantado del gobierno. Sin lugar a duda, constituyen la lista más débil de las cinco en disputa y no es evidente que puedan elegir más de tres o cuatro consejeros. Pese a recibir el apoyo del expresidente Lagos (que admitió su error de haber respaldado a Jaime Revinet, reafirmando su apoyo a la presidente del PPD), y Michelle Bachelet, que grabara un apoyo a Carmen Frei, pese a haber formalizado su apoyo a Sadi Melo, el candidato PS por la región metropolitana,

El pesimismo prende en las filas del oficialismo ante la posibilidad de que la derecha conquiste mayoría absoluta en el consejo constituyente, imponiendo sus propios términos para aprobar un nuevo texto constitucional. Sectores del oficialismo (incluso militantes comunistas) de manera bastante tardía, han intentado deslegitimar el proceso, llamando a votar nulo o no votar en estas elecciones. A estas alturas, ello solo puede contribuir a profundizar una derrota anunciada.

Una debacle oficialista en esta elección no tan sólo pone en riesgo el nuevo proceso constituyente sino implica un duro golpe para el gobierno y una seria amenaza a sus reformas emblemáticas. Es evidente que la elección del nuevo consejo constituyente no cambia la correlación de fuerzas que hoy existe en el parlamento (en donde el gobierno no cuenta con mayoría) pero le resta capacidad de negociación al oficialismo.

Tras el desenlace del nuevo proceso electoral, el gobierno deberá fijar una nueva hoja de ruta, asumiendo que en el plebiscito no estaba en juego su programa de gobierno sino la elección del órgano resolutorio del proceso constituyente. Pero que un mal

resultado debe ser asumido como un dato que es preciso revertir con mayor y mejor gestión política y administrativa, buscando los espacios para avanzar en un complejo escenario, en donde no tan sólo no cuenta con mayoría parlamentaria sino también en donde soplan vientos más bien conservadores en el país y en donde el riesgo del populismo está cada vez más presente.

El futuro de las reformas emblemáticas del gobierno

En el terreno económico, aún se mantienen las tiras y aflojas por el nuevo royalty minero, El ministro Mario Marcel ha debido bajar el monto del tributo máximo del 50 % inicial al 48 y luego al 47 %. Y aún los empresarios lo consideran excesivo. Todo apunta a que el tema se resolverá con posterioridad a los próximos comicios y sus resultados no dejarán de incidir en su desenlace.

Algo parecido sucede con el nuevo pacto fiscal que busca el gobierno tras el rechazo a la idea de legislar por la cámara de diputados. Tanto la derecha como el sector empresarial buscan imponer sus propias condiciones en ese nuevo pacto fiscal, que no tan sólo busca reducir el porcentaje de recaudación a la mitad de lo inicialmente presupuestado, sino también un ajuste del gasto, ampliación de la base tributaria y nuevos incentivos para la inversión y el emprendimiento.

Respecto de la reforma del sistema previsional, subsisten importantes diferencias entre el gobierno y la oposición. El contra proyecto sobre la materia presentado por Chile Vamos no constituye propiamente una reforma sino una adecuación del actual sistema previsional, preservando el rol de las administradoras privadas, el sistema de capitalización individual y una solidaridad de cargo fiscal, sin precisar el origen de su financiamiento.

En materia de salud, el debate está centrado en la crisis por la que atraviesan las ISAPRES, agravada por el reciente fallo de la Corte Suprema, que establece la devolución de cobros excesivos. En verdad, las ISAPRES están buscando un verdadero “salvataje” para evitar su colapso y obliga al gobierno a definiciones de fondo acerca del futuro de la salud.

El acuerdo suscrito por los presidentes de ambas cámaras y el gobierno en materia de seguridad pública, fijando una clara agenda, permite suponer que tendrá un trámite expedito en el parlamento, aún cuando la oposición acusa que el ejecutivo no pone las urgencias correspondientes. Pero no quiere decir que esa agenda podrá ser aprobada en su integridad sin un gran debate y la superación de importantes diferencias en temas tan relevantes como las atribuciones del ministerio de seguridad pública o el nuevo sistema de inteligencia

La política del Litio y las resistencias empresariales

El gobierno anunció la nueva política del Litio, generando fuertes críticas Empresariales. Los mismos empresarios que habían aplaudido al presidente en la mañana en la ENADE, salieron a criticarlo duramente en la noche tras conocer los anuncios presidenciales. “En la mañana el presidente pronunció un discurso como Ricardo Lagos y en la tarde uno como Salvador Allende” sostuvo el presidente de la UDI. Ricardo Mewes, presidente de la CPC fue un poco más lejos, sosteniendo que no había sido consultados, que los anuncios mostraban una desconfianza hacia el sector empresarial y que temía que se viera una ola de estatizaciones de parte del gobierno. A partir de allí se desató una verdadera campaña de descalificaciones y críticas frente a una política calificada de estatista, sosteniendo que ningún empresario estaría dispuesto a arriesgar su capital en empresas controladas por el estado.

Algo de esta polémica dice relación con el debate acerca del famoso estado subsidiario que defiende la derecha. En verdad, esas críticas tan sólo muestran el ideologismo de las cupulas empresariales. En primer lugar, el Litio ya es estatal, pertenece a todos los chilenos y chilenas, como precisó el gobierno. La propuesta de una asociación público-privada, manteniendo el control estatal en los yacimientos estratégicos, como afirmara el ministro de hacienda, es una propuesta moderada, que asume las limitaciones del estado para explotar por si sólo esta riqueza básica y revela confianza que si existirán inversionistas nacionales o extranjeros, que están más que dispuestos a asociarse con el estado en estos nuevos emprendimientos, como lo evidencias múltiples conversaciones que ha sostenido el gobierno con eventuales inversionistas.

Tanto SOQUIMICH como Abelmarle, las dos empresas que explotan en Litio en nuestro país con un sistema de arrendamiento han mostrado mayor pragmatismo y apertura para esta propuesta de asociación público-privada, que les garantiza mantener un lucrativo negocio, con plenas garantías de respeto a las reglas del juego que deberá definir el gobierno.

El gobierno tiene un muy buen punto en la política anunciada. La inmensa mayoría de los chilenos comparte la idea de mantener el control de sus recursos naturales no renovables y capturar la mayor parte de sus utilidades en beneficio del país, sobre todo, teniendo a la vista las dificultades de fijar un royalty justo para el cobre y demás minerales que hoy se debate en el parlamento.

Tensiones fronterizas

La crisis migratoria que hoy enfrenta el país entró en una nueva fase por el problema suscitado en la frontera norte, con la presencia de más de un centenar de inmigrantes que buscan retornar a sus países de origen y que Perú les impide su ingreso. La acusación de algunas autoridades peruanas es que Chile intenta traspasar el problema generado por inmigrantes indocumentados y que debe resolverlo el propio gobierno chileno.

El despliegue de militares peruanos en la frontera es una decisión soberana de ese país, pero genera obvias tensiones entre ambas naciones, sin descartar que se puedan generar incidentes. Naciones Unidas ha llamado al diálogo diplomático y la búsqueda de soluciones, así como la necesidad de respetar los derechos humanos de los inmigrantes y entregarles ayuda humanitaria.

En verdad, el problema no tiene una solución fácil y no aparece simplemente como un problema entre Chile y Perú, sino que involucra a todos los países de tránsito y, muy en especial a los países de origen de estos inmigrantes que hoy buscan retornar.

La propuesta de un corredor humanitario formulada por nuestro país necesariamente requiere del acuerdo de estos países y es lo que ha venido trabajando la Cancillería chilena. Hay todo un tema en el caso de Venezuela, que se ha negado a recibir vuelos directos desde nuestro país con inmigrantes retornados y que no tiene una verdadera política de retorno para estos inmigrantes.

En diversas ocasiones, el presidente Boric ha sostenido que el tema de la inmigración debe ser asumido en base a la cooperación internacional. Una cooperación difícil de materializar en el fragmentado escenario que hoy presenta la región, con realidades muy diversas en materia de inmigración.

No ha sido fácil para nuestro país buscar la cooperación de Bolivia, país con el que no se mantiene relaciones diplomáticas, para contener el flujo migratorio de indocumentados por la localidad de Colchane, ciudad fronteriza, y la reconducción de estos documentados.

El Canciller Van Klaveren ha sostenido que el país tiene copada su capacidad de recibir nuevos inmigrantes. Una afirmación que puede tener más de un fundamento, pero que choca con un fenómeno que se mantiene latente en el convulsionado escenario político y económico que presenta la región.

No deja de ser preocupante la percepción de una mayoría ciudadana frente a la inmigración, que tiende a asociar, sin mucho fundamento, con el incremento de la delincuencia y la violencia. Tal como lo muestra la reciente encuesta de la UDP y Feedback, la mayoría de los encuestados asume que la inmigración perjudica el empleo y los ingresos de los chilenos y se muestra partidario de la inmediata expulsión de los indocumentados.

Obviamente que los incidentes en la frontera norte no sólo incrementan la preocupación por el fenómeno migratorio, sino que pueden tensionar nuestras relaciones vecinales.

FUNDACIÓN FELIPE HERRERA
PDTE. JUAN ANTONIO RÍOS N° 58 – PISO 3 (26 33 99 79)